Santos: Nuevo gobierno y continuidad del régimen uribista

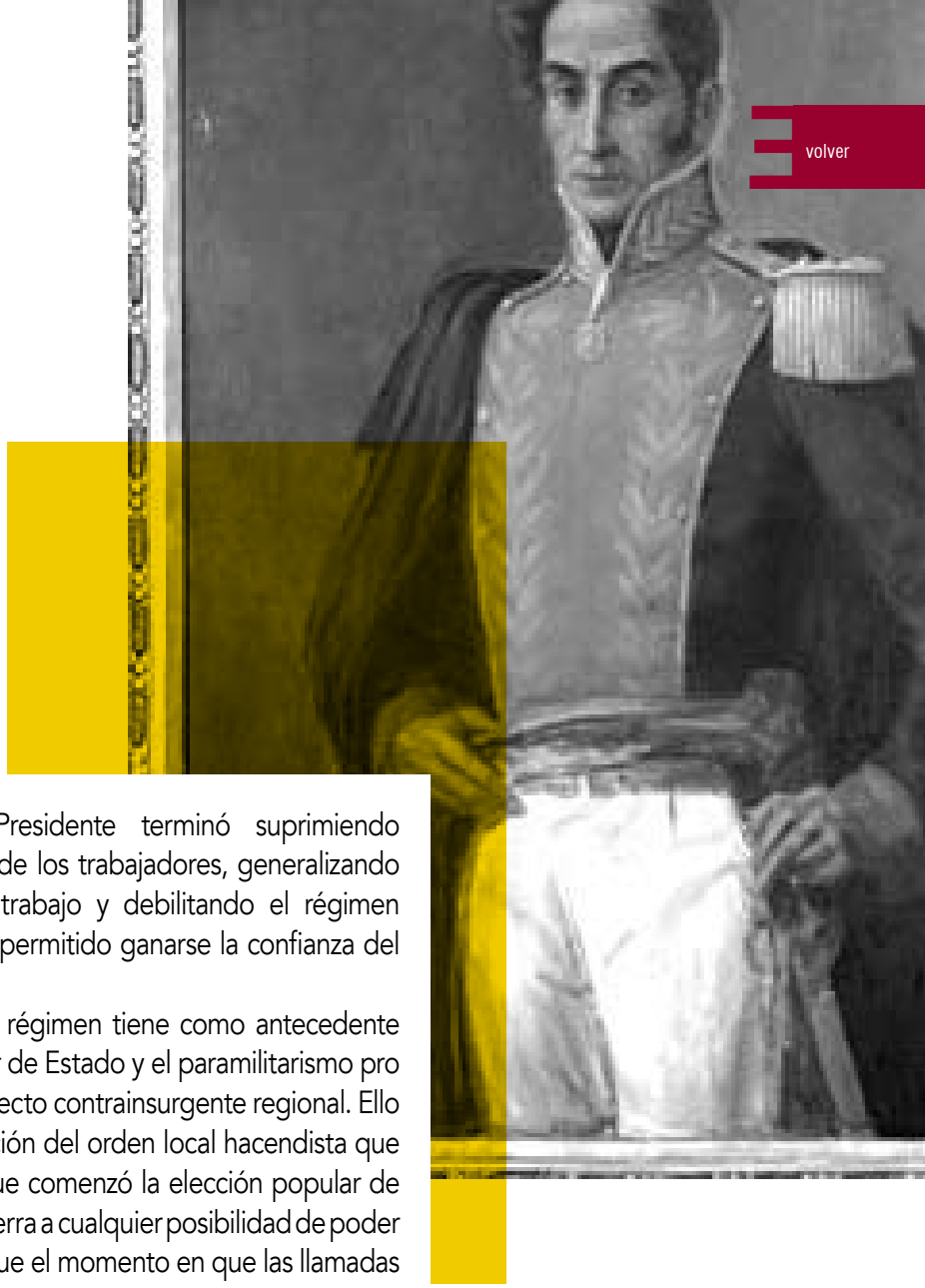
Daniel Libreros

Profesor
Departamento de
Ciencia Política
Universidad Nacional
de Colombia

El triunfo de Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales confirma que la propuesta política uribista que comenzó ganando con el discurso de la "seguridad democrática" la unidad política de todas las fracciones del capital frente al cierre del ciclo de negociaciones con las FARC, terminó por producir un cambio estructural en el régimen político.

La instauración de este régimen tiene como antecedente la derrota del movimiento obrero y popular, que desde mediados de la década de los ochenta, ilegalizado como si fuera apéndice de las guerrillas, padeció el terror de Estado, el paramilitarismo y la ofensiva neoliberal del gran capital. Los 3.000 muertos que registra la CUT desde su fundación en 19861, además de los miles de muertos anónimos en campos y ciudades, evidencian esta tesis. Uribe en persona ha expresado el sello de clase de esta operación política. Como parlamentario fue el ponente de la "apertura laboral" (ley 50 de 1990) y de la privatización de la seguridad social (ley 100

1 Datos de la Comisión de Derechos Humanos de la CUT.



de 1973). Como Presidente terminó suprimiendo conquistas históricas de los trabajadores, generalizando las cooperativas de trabajo y debilitando el régimen pensional. Esto le ha permitido ganarse la confianza del gran capital.

Igualmente, este régimen tiene como antecedente la utilización del terror de Estado y el paramilitarismo pro *status quo* como proyecto contrainsurgente regional. Ello posibilitó la preservación del orden local hacendista que en el momento en que comenzó la elección popular de alcaldes decretó la guerra a cualquier posibilidad de poder regional alternativo. Fue el momento en que las llamadas autodefensas realizaron el genocidio sobre la Unión Patriótica y asesinaron a centenares de dirigentes cívicos2. Luego vino la institucionalización del paramilitarismo con las llamadas "Convivir" en las que, igualmente, Uribe jugó

2 Romero Mauricio, "Paramilitares y Autodefensas -1982-2003". IEPRI, Universidad Nacional, Bogotá, 2003.

un papel protagónico como gobernador de Antioquia, con las cuales se logró "desnarcotizar" transitoriamente ante el gobierno norteamericano la actuación de los herederos del cartel de Medellín3 y se abrió paso a la emergencia de una nueva clase política que, desde esos espacios locales, ampliados con la elección popular de gobernadores, diseñó una estrategia nacional que consiguió resultados con la llegada al palacio presidencial del mismo Uribe. Esta clase política, aunque judicializada como "parapolítica", ha sido decisiva en la consolidación del régimen uribista. Juega un papel protagónico en el partido de la U y preserva los poderes locales. También conforma el PIN, que votó en silencio por Santos y que con el cinismo que le permite la ausencia de escrúpulos tanto en la vida pública como en la privada –a la que se ha acostumbrado el colombiano promedio por la generalización de la cultura traqueta–, logró convertirse en un fenómeno electoral exitoso en las últimas elecciones parlamentarias mediante la compra abierta de votos, el reparto de mercados y el fraude en las planillas de la Registraduría, lo cual, de paso, confirmó el anacronismo de nuestro sistema electoral

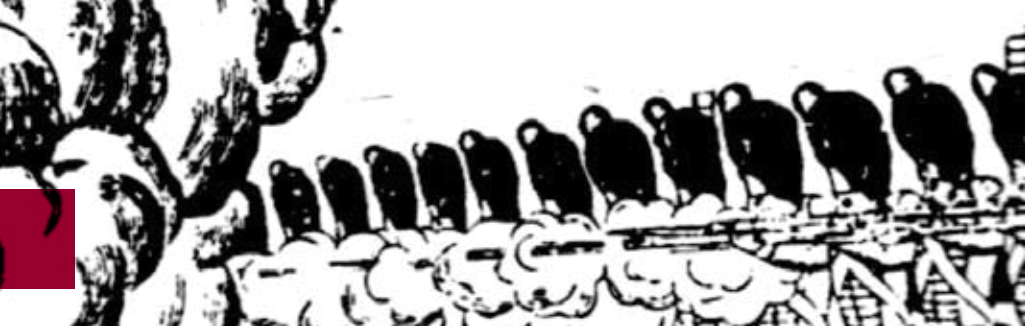
Paramilitarismo y clase política lumpesca le garantizan al gran capital el control sobre los territorios, la columna vertebral del actual modelo económico basado en la gran inversión minera4 y el "hacendismo verde" productor de agrocombustibles, el cual, en la medida en que se extiende, desplaza a millones de campesinos5. Garantizan, además, la manipulación política-clientelar de poblaciones empobrecidas que encuentran en la "economía informal" (contrabando, chance, préstamos gota a gota, lavado de dinero en pequeña escala) un medio de subsistencia.

El terror de Estado, que ha quedado al desnudo durante los gobierno de Uribe con los llamados falsos positivos, "chuzadas" del DAS y persecución abierta a la oposición

3 Morales Natalia y La Rotta Santiago, "Los Pepes", tesis de grado de la Universidad de Antioquia, Medellín, 2008.

4 El año pasado cerca de la mitad del monto de inversión en Extranjera Directa lo constituyó la inversión la gran minería, un poco más de US$4.000 millones. Datos tomados de la Balanza de Capitales del Banco de la República.

5 Sintraminercol ha presentado varios informes sobre la forma como el paramilitarismo sigue el corredor de la minería. En el caso de la palma aceitera existen las investigaciones de A. Ibáñez publicadas en diversas universidades. Igualmente fueron presentados por Clara López y Piedad Córdoba en varios debates parlamentarios sobre el tema en el segundo semestre de 2008.



política y social, facilitó la aplicación de las políticas neoliberales, el cumplimiento de las exigencias del FMI, la privatización del patrimonio público, la financiarización de la economía. Las grandes decisiones del gobierno han estado en manos de las Instituciones Financieras Internacionales –IFIS– y de la tecnocracia interna que las avala6. Ese terror estatal se acompaña del asistencialismo de "familias en acción", con sus dos y medio millones de afiliados en los estratos 1 y 2, y el control ideológico de los medios masivos de comunicación que durante los últimos años ha actuado sobre la base de una matriz de opinión conforme a la cual todo tipo de oposición debe condenarse como cómplice de las FARC.

La guerra ya no expresa tan sólo un consenso interburgués, sino, que, ha devenido en el soporte político del actual modelo de acumulación capitalista dependiente y de legitimación del terror estatal. No es casual que Uribe haya dejado un presupuesto nacional con un gasto militar mayor al educativo.

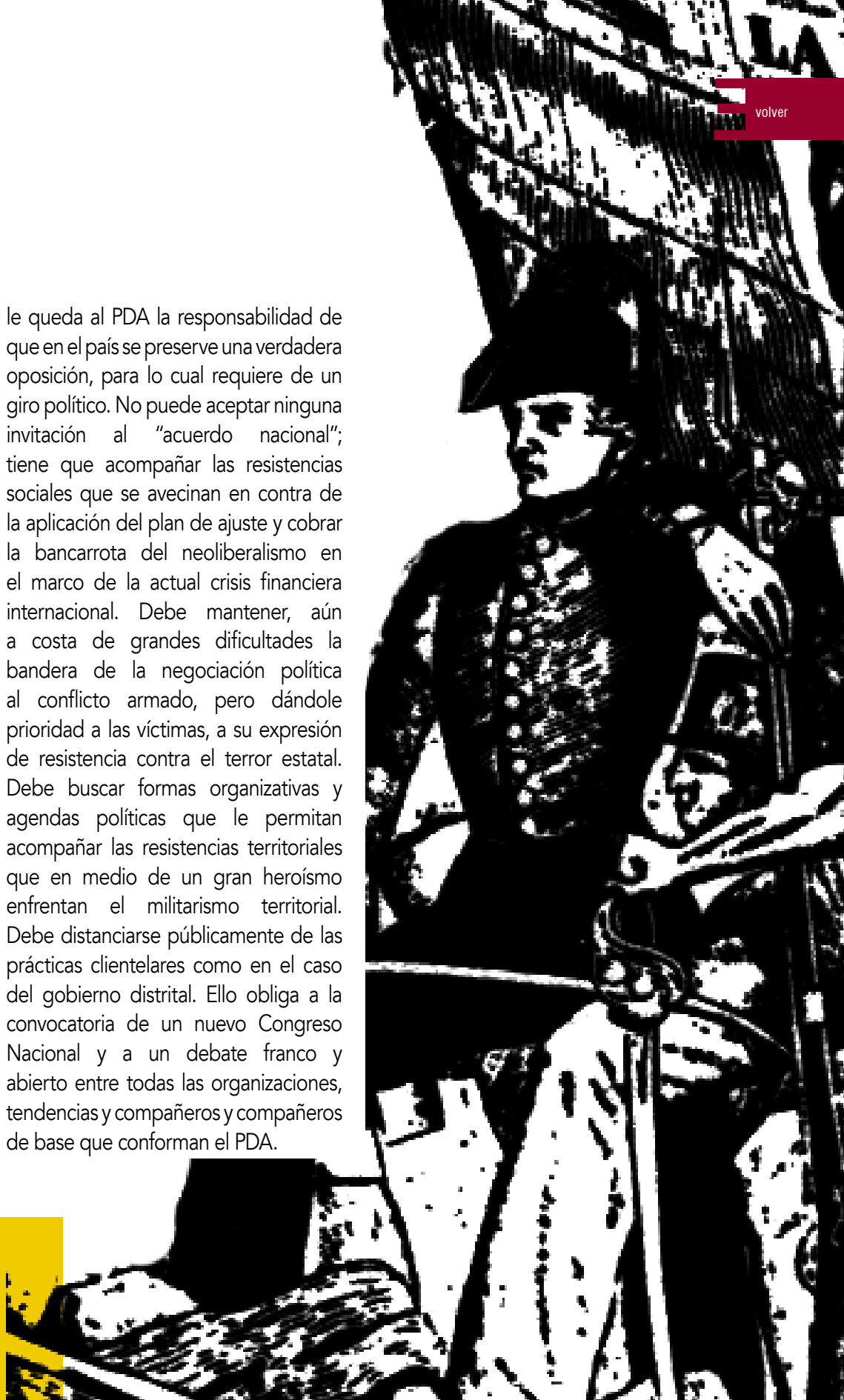
La fase actual de esta guerra fue diseñada por el Pentágono mediante el Plan Colombia durante el segundo gobierno de Clinton y fortalecida en el gobierno de G. Bush en el marco de la política antiterrorista, después del atentado a las torres gemelas en New York. El imperio ha obtenido resultados indiscutibles, comerciales y militares. Ha logrado un enclave y siete nuevas bases militares para desarrollar ofensivas diplomáticas y militares futuras en la región.

El triunfo de Santos y la propuesta de "acuerdo nacional" que ha presentado reflejan el reconocimiento por parte de las elites y la clase política tradicional de la hegemonía política del proyecto uribista. El

6 En 1999, en el marco de la baja en el comercio mundial que produjo la crisis de los llamados "tigres asiáticos", Colombia firmó un Acuerdo Extendido con el FMI contra un préstamo de contingencia de US$ 2.400 millones que significó la ejecución de varias reformas legislativas: el Acto Legislativo 1 del 2001 que acabó con el incremento porcentual de las transferencias regionales y que fue ratificado en el 2007, reforma laboral, reforma pensional, reforma tributaria, modificaciones al Estatuto Orgánico de Presupuesto y privatización de un área considerable del presupuesto público. El gobierno de Uribe cumplió con estas exigencias fondomonetaristas al pie de la letra.

"acuerdo nacional" constituye una nueva versión del Frente Nacional, ya que integra al conjunto de las expresiones de la clase dominante, a los gremios del capital, a los partidos y a la Iglesia, pero se diferencia en cuanto que, al contrario del anterior Frente Nacional, los partidos tradicionales han quedado como apéndices secundarios de una amalgama política-ideológica amorfa cuyo objetivo es el de repartirse parcelas de poder y de articularse a los negocios que posibilitan la privatización del patrimonio público, reparto organizado por la figura presidencial. El "acuerdo nacional" seguirá siendo guerrerista. Los reconocimientos del "cadete" Santos a las Fuerzas Armadas en el discurso triunfal anuncian el interés del ex Ministro de Defensa de Uribe de legislar, con un Congreso que controla mayoritariamente, en pro del desconocimiento de la responsabilidad de los militares en la violación de derechos humanos, lo que incluye hasta los "falsos positivos", y de recuperar el "fuero militar". En esa misma perspectiva procurará una legislación que favorezca a los acusados por parapolítica. En ese mismo discurso cerró inclusive la posibilidad acuerdos humanitarios con las FARC.

Igualmente, padeceremos el mismo modelo de "confianza inversionista", con grandes exenciones tributarias, zonas francas, subsidios a los ricos a la manera de "Agro Ingreso Seguro", ahora acompañado de un plan de ajuste en contra de la población. La crisis económica internacional obligará al gobierno entrante a ejecutar este plan. El FMI ha definido que el déficit fiscal acumulado de 4,5 puntos del PIB debe reducirse y que, por ende, es necesario comenzar el ajuste con una reforma tributaria que aumente los IVAs, que incluya más artículos en la base de liquidación de este impuesto y que elimine las rentas parafiscales. Los voceros de ANIF y FEDESARROLLO ya empezaron a exponer esta propuesta regresiva.

¿Y la oposición? Es un hecho que el llamado Partido Verde no hará una verdadera oposición. La candidatura de Mockus fue agenciada por sectores del capital financiero internacional y representantes de los mismos en Colombia, como Rudolf Hommes y Armando Montenegro. Tanto Mockus como los ex alcaldes de Bogotá que lo acompañan en la dirección de ese partido fueron artífices de la urbe neoliberal en que se ha convertido la ciudad capital. Por tanto,

le queda al PDA la responsabilidad de que en el país se preserve una verdadera oposición, para lo cual requiere de un giro político. No puede aceptar ninguna invitación al "acuerdo nacional"; tiene que acompañar las resistencias sociales que se avecinan en contra de la aplicación del plan de ajuste y cobrar la bancarrota del neoliberalismo en el marco de la actual crisis financiera internacional. Debe mantener, aún a costa de grandes dificultades la bandera de la negociación política al conflicto armado, pero dándole prioridad a las víctimas, a su expresión de resistencia contra el terror estatal. Debe buscar formas organizativas y agendas políticas que le permitan acompañar las resistencias territoriales que en medio de un gran heroísmo enfrentan el militarismo territorial. Debe distanciarse públicamente de las prácticas clientelares como en el caso del gobierno distrital. Ello obliga a la convocatoria de un nuevo Congreso Nacional y a un debate franco y abierto entre todas las organizaciones, tendencias y compañeros y compañeros de base que conforman el PDA.